

Ciudad de Guatemala, 25 de septiembre de 2026.

Misión internacional denuncia vulneraciones de derechos de comunidades indígenas y campesinas en resistencia de Alta y Baja Verapaz

Una misión internacional conformada por 8 representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas y medios de comunicación, provenientes de diversos países de Europa, Sudáfrica y Guatemala, ha visitado a comunidades en resistencia de Alta y Baja Verapaz. La misión insta al Estado guatemalteco a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinado, la defensa del territorio y la protección de los ríos Cahabón y Canlich.

Durante cinco días, la misión internacional recorrió diversas comunidades indígenas y campesinas en resistencia en la región de Alta y Baja Verapaz, y escuchó alegaciones de múltiples violaciones de derechos humanos que, según los casos observados, se inscriben en patrones generalizados de violaciones de derechos vinculados a proyectos de energía “limpia” y a actividades de empresas transnacionales en distintas partes del mundo, y se inscriben en una arquitectura global de impunidad corporativa en la que los costes sociales, económicos y ambientales recaen de manera desproporcionada sobre comunidades, trabajadoras, trabajadores y grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente en los países del Sur Global.

Se conoció las preocupaciones de las comunidades relacionadas con proyectos empresariales multinacionales, como el complejo hidroeléctrico RENACE, propiedad de Corporación Multi Inversiones (CMI) y mecanismos para la Reducción de las Emisiones por deforestación vinculados a REDD+ y al mercado de carbono.

La misión recogió testimonios de más de 30 autoridades ancestrales, lideresas, dirigentes y defensoras comunitarias, personas defensoras de derechos humanos y habitantes de las comunidades afectadas; quienes relataron situaciones de vulneración de derechos colectivos y ambientales que afecta a más de 90 comunidades.

Entre las principales preocupaciones y denuncias recogidas se encuentran:

- Despojo del agua y de sus territorios.
- Privatización y mercantilización del río Cahabón para la generación de energía eléctrica para el mercado privado y centroamericano.

- Falta de garantías del derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
- Criminalización de la defensa territorial: judicialización y encarcelamiento de autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios.
- Graves impactos ambientales asociados a la construcción y operación del complejo hidroeléctrico Renace, como el desvío y canalización en cascada de más de 30 kilómetros del cauce natural del río Cahabón.
- Ruptura del tejido social comunitario y afectaciones al derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación y organización.
- Agudización del problema agrario y la conflictividad por la tierra derivado de la deficiencia del trabajo de Registro de Información Catastral (RIC).
- Imposición de proyectos de bonos de carbono sin consulta, desvinculados de las poblaciones que protegen los bosques.

La información recibida apunta a la vulneración de derechos reconocidos y consagrados en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Comunidades que defienden sus derechos

Durante el recorrido, las comunidades compartieron las acciones que, durante años, han impulsado para defender sus derechos colectivos y explicaron cómo con sus propios medios han desarrollado estrategias jurídicas, políticas, de incidencia y movilización frente a los impactos que atribuyen a los diversos actores presentes en los territorios como los megaproyectos y a otros mecanismos de explotación y mercantilización de los bienes naturales.

Las demandas trasladadas a las instituciones del Estado

En el marco de la misión, las organizaciones participantes han trasladado sus preocupaciones y demandas a distintas instituciones del Estado guatemalteco, entre ellas la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad Territorial (COPRECON), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPADEH), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) y el Ministerio de Gobernación.

Las organizaciones firmantes de este comunicado instan al Ejecutivo y a las instituciones competentes a responder a las demandas de las comunidades y a garantizar sus derechos humanos, incluidos el derecho a la consulta, previa, libre e informada, el derecho al agua y al saneamiento.

Exigen igualmente el respeto a los derechos fundamentales y a garantizar que autoridades indígenas, dirigentes comunitarios y personas defensoras puedan ejercer su labor sin amenazas, represalias ni uso indebido de procedimientos penales, para asegurar su participación efectiva en las decisiones que afectan a sus territorios y bienes naturales.

Asimismo, instan al Estado de Guatemala a respaldar, en el ámbito internacional, las reivindicaciones de las comunidades afectadas por empresas transnacionales, mediante una participación activa y propositiva en las negociaciones en curso para la elaboración de un tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a regular las actividades de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos.

La misión manifiesta solidaridad a los pueblos y comunidades en lucha y resistencia, reconoce la dignidad y determinación de quienes continúan defendiendo legítimamente sus derechos y territorios.

¡Justicia para los pueblos indígenas y campesinos! ¡Justicia para los ríos Cahabón y Canlich! ¡Justicia para los pueblos Maya Q'eqchi', Poqonchi y Achi'! Justicia para las comunidades de Xicacao, Catalji, Llano Largo, Río Dolores, Cerro Xucaneb, Concepción Panchicivic y Lanquin.

Organizaciones firmantes:

- ASECSA - Asociación de Servicios Comunitarios de Salud
- Alternativa - Intercanvi amb pobles indigenes
- Bufete de abogados para los Pueblos Indígenas
- Prensa Comunitaria, Guatemala
- CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
- Mugarik Gabe
- TNI - Transnational Institute, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad
- Euskal Herria Bildu
- ZiboitiaBai

